

CUANDO SE QUIERE, SE PUEDE

HUGO PALACIOS MEJIA

Ex Ministro de Hacienda y Crédito Público;
ex Gerente General del Banco de la República.*

La inflación sobreviene, casi siempre, por razones políticas. Es cierto que hay algunos factores naturales o externos que, temporalmente, impulsan los precios hacia el alza; pero las personas que han hecho estudios profesionales de economía conocen los medios para buscar de nuevo su estabilidad. Cualquier texto de nivel intermedio tiene la receta. Lo que no proporcionan los textos, y lo que no siempre tienen los economistas, es la voluntad o la posibilidad política de aplicarla.

Todo el mundo es, en principio, enemigo de la inflación. Pero casi todo el mundo está dispuesto a hacer excepciones. Y por eso los políticos, los industriales, los agricultores, los sindicatos, los banqueros, los líderes "cívicos", presionan a las autoridades económicas para conseguir medidas que los favorecen, pero que son inflacionarias. Solo que cada grupo inventa argumentos para afirmar que la inflación que busca es pequeña, o que es "justa", o que, al final, traerá mayor oferta de bienes y servicios y que, por lo tanto, llevará de nuevo a la estabilidad.

Aparecen, entonces, los partidarios de la inflación "a la CEPAL", o proteccionista, que piden a las autoridades que encarezcan las importaciones de bienes industriales, o las de productos agrícolas, para estimular la producción local. Y aparecen los políticos, y los apóstoles, y otras personas llenas de buenas intenciones, a pedirle al Gobierno empleos, escuelas, hospitales, agua, electricidad, carreteras, policía, jue-

ces, aviones de guerra, ópera y deporte, pero que, naturalmente, no quieren que el Gobierno les esculque sus cuentas corrientes, ni que cobre nada por todo ello. O que no cobre sino "lo justo" que, en su lenguaje, significa cobrar menos de lo que esos bienes cuestan. Y aparecen, finalmente, los devotos de la moneda fácil, para quienes el proceso económico se agota en dos instancias: una transitoria, en donde se le proporciona a la gente todo el dinero que pida para "producir", y otra en donde ese dinero se convierte en una oferta amplia y permanente de bienes que asegura que los precios no suben.

Los voceros de las presiones inflacionarias casi siempre tienen éxito. Unas veces, las menos, porque las personas que manejan la política económica son ingenuas y les aceptan de buena fe sus argumentos. Otras, porque estas personas consideran que su apoyo es importante para mantenerse en el puesto o para ganar las próximas elecciones. Otras, porque estiman que el impacto de la inflación sobre la tranquilidad pública es menor que el que tendría el enfrentamiento abierto con sus voceros. Y otras veces, las más, por una mezcla de todos estos motivos.

Por complacer a los voceros de las presiones inflacionarias, los gobernantes no aplican las

* Intervención del doctor Hugo Palacios Mejía en el debate convocado por El Siglo el 10 de mayo de 1988.

recetas que aprendieron como estudiantes en los libros de texto. Y se forma así una curiosa alianza, alianza interesada, en donde los voceros de la inflación vociferan contra las "escuelas", la "ortodoxia" y el "monetarismo", término éste que ha venido a ser igual, en el lenguaje de los voceros de la inflación, a todo lo que no signifique emitir moneda con generosidad. Y en donde los gobernantes los acolitan afirmando que las recetas no funcionan sino en los textos y no en la vida real. De esa manera, culpando a la teoría económica, unos y otros ocultan el hecho de que han resuelto un conflicto político acordando un cierto nivel de inflación, y asignando sus beneficios a las partes más fuertes del conflicto. La inflación, pues, es el termómetro que mide, entre otras cosas, la debilidad de los gobernantes para hacer frente a los grupos de presión y trabajar por el bien común.

"El Siglo" nos pregunta por los efectos económicos de la inflación. Y nos anticipa la respuesta: perturba la asignación de recursos, la distribución del ingreso y el crecimiento económico. No sabría qué añadir; porque el tema ha sido explorado hasta la saciedad. Pero si hiciera falta poner énfasis en alguno de sus efectos, yo lo pondría en el deterioro social que produce. Las víctimas de la inflación son, ante todo, los más débiles. Las personas que viven de un sueldo, o de una pensión de jubilación. Los desempleados. Una de las grandes paradojas de nuestra vida política consiste en que tantas veces la inflación se haga en su nombre.

En los países en desarrollo la lucha contra la inflación es más difícil. Ante todo, porque hay más barreras naturales e institucionales a la movilización de los recursos. Cada cual reclama que se lo proteja de la competencia. Todo ello en íntima conexión con el hecho de que la población es menos educada que en los países ricos. Por eso las teorías económicas son más simplistas. Se cree más en los controles administrativos, es decir, en la economía del "voodoo". Se supone que se tiene derecho a todas las cosas que se desean. Se vive en una permanente revolución de expectativas. Se afirma que las mayorías podrían estar mucho mejor, súbita-

mente, si solo algunas pocas personas perversas lo permitieran. Los medios de publicidad se hacen eco, todo el tiempo, de estas actitudes, que los maestros reproducen en las escuelas y las universidades, que algunos sacerdotes proclaman desde los púlpitos y que, por supuesto, los políticos repiten. Las autoridades, democráticas o dictatoriales, encuentran casi imposible políticamente enfrentarse a la fuerza de los lugares comunes que predominan en la sociedad que dirigen. No es una coincidencia, entonces, que tantos de estos países se distingan por sus altísimas tasas de inflación.

El equipo económico del gobierno Barco es excelente; está compuesto por personas de altas calidades profesionales, honestas, con una destacada voluntad de servicio público. A veces se equivocan, como todos nosotros. Pero si la inflación avanza en estos días no es por falta de pericia suya; es, más bien, porque se los ha puesto en un contexto político más exigente que el que vivimos en los últimos años. Los presidentes de los gobiernos compartidos, cuando quisieron apoyo contra los grupos de presión, pudieron buscarlo en gentes conservadoras y liberales: su base de poder era, en principio, amplísima. Por el contrario, cuando el presidente Barco decidió poner en marcha el esquema Gobierno-Oposición, quedó prisionero de la clase política de su partido. Y ésta se lo ha hecho sentir. Esa clase política sabe que es fuerte para exigir más, y para seguir siendo fuerte se siente obligada a prometer más; a su turno, la que está fuera del Gobierno no sabe por qué o con quién ser solidaria, y encuentra legítimo estimular las expectativas de quienes pueden llevarla al poder de nuevo. ¿Es extraño, entonces, que se acelere la inflación? La culpa no es del equipo económico; la inflación no se debe al Ministerio de Hacienda, ni al Departamento Nacional de Planeación, ni al Banco de la República, ni a los asesores de la Junta Monetaria. Y temo que quienes critican su gestión no lo hacen porque el equipo económico haya sido laxo en la política fiscal o monetaria sino, más bien, porque no ha sido tan complaciente como algunos quisieran. O porque no ha avalado la economía del "voodoo", con la que se engaña a tantos en el trópico.

Colombia podría volver a una inflación de un dígito, pero no en el corto plazo. Porque quien fuera a intentarlo tendría que realizar un enorme esfuerzo de pedagogía social; y tendría que buscar un apoyo político muy amplio, así fuera para gastarlo en el proceso. Digo para gastarlo, porque, como afirmé atrás, a nadie le gusta la inflación, pero todo el mundo ama ciertas medidas inflacionarias, bien porque lo favorecen o porque son parte de su religión política. Para tener una inflación de un dígito sería necesario, por ejemplo, reducir el déficit fiscal, lo cual significa congelar la nómina en el sector público. Sería necesario también vender las empresas oficiales: los bancos, las fábricas, SOFASA, el IFI, ECOPETROL . . . Sería necesario, de otra parte, forzar a las empresas del sector eléctrico a pagar su deuda externa, en vez de continuar desnaturalizando el FODEX. Habría sido necesario usar las facultades de la Ley 12 de 1986 para que los municipios hubieran asumido gasto público en cuantía equivalente a los ingresos que van a transferírseles del IVA. Y sería necesario abrir más el sector externo de la economía, para que los colombianos pudieran aprovechar mejor los precios baratos, y las economías de escala, y los inversionistas que existen en los mercados internacionales. Ninguna de estas cosas es posible, por ahora, en Colombia porque, ¿dónde guardaríamos todos los discursos que se han hecho sobre la necesidad de inspirarse en "las cante-ras del socialismo", y todas las promesas de servicios públicos baratos, y todas las solicitudes de empleo en el sector público? Vendrán días mejores, pero hoy no es posible en Colombia alcanzar una inflación de un dígito.

Para conseguir equilibrio en el nivel de precios hay que controlar el déficit fiscal, la expansión monetaria. Las medidas administrativas sirven para impulsar al mercado, no para burlarlo. Por eso en 1986, cuando la política macroeconómica había creado las condiciones para que descendieran las tasas de interés, el presidente Betancur, a quien yo servía en el Ministerio de Hacienda, las bajó por decreto, anunciando que la medida era temporal. Como no hicimos sino acelerar lo que el mercado habría terminado haciendo por sí mismo, cuan-

do levantamos la medida las tasas se quedaron por más de un año en el nivel en el que las habíamos puesto . . .

Cuando la inflación se acelera sus voceros ponen el grito en el cielo, se declaran sorprendidos y se dan golpes de pecho en el pecho del vecino. Enseguida atribuyen el problema a los especuladores, o al mal de ojo, o a algún chivo expiatorio dentro del Gobierno. Y en vez de pedir que se actúe sobre el déficit fiscal o sobre los medios de pago, reclaman hordas policiales contra los tenderos. En la Edad Media, también se quemaban las brujas y los judíos. Ahora se promulgan, con bando y pregón televisivo, controles administrativos sobre los precios y se amenaza con extenderlos a las tasas de interés. Solo que los precios no obedecen; y los bienes que se quería controlar no se abaratan sino que desaparecen, o pierden calidad; díganlo, si no, los enfermos colombianos a quienes el Ministerio de Salud ha ido dejando gradualmente sin drogas, con el ánimo de dárselas a bajo costo. Ni las tasas de interés descienden cuando los ahorradores saben que se está perdiendo la lucha contra la inflación; lo que desciende, cuando se insiste en controlar las tasas por decreto, llevándole la contraria al mercado, son las reservas internacionales. El efecto de los controles administrativos consiste pues, en enriquecer a los controladores, y a los que toman el riesgo de organizarse para burlarlos. Y en acentuar el desprestigio del Gobierno, que después de anunciar que controlará los precios tiene que registrar su ascenso continuo al final de cada mes . . .

No creo que Colombia esté al borde de una hiperinflación. Pero es evidente que el Gobierno está bajando la guardia. En efecto, el Gobierno logró avances significativos durante 1987: por ejemplo, el PIB creció cerca de un 5.5%; el desempleo se redujo al 10%; y se avanzó en la reducción del déficit fiscal. En cambio, en el programa macroeconómico de 1988 se prevé un considerable crecimiento del déficit fiscal, que ascendería, si las cosas no empeoran, al 3.1% del PIB. Para juzgar ese hecho es preciso tener en cuenta que a veces no importan tanto las magnitudes, que son considerables en este

caso, como el hecho de que se reviertan las tendencias. En efecto, desde 1985 habíamos conseguido reducir gradualmente el déficit fiscal en relación con el PIB; ahora existe la impresión de que hubo un quiebre en la voluntad política de controlar el gasto. Porque, a diferencia de lo que ocurrió en 1983, no estamos ante una súbita disminución de los ingresos fiscales. Por el contrario, estamos ante nuevas presiones para el gasto inflacionario. Estas vienen, sobre todo, de entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía: ECO-PETROL, y las del sector eléctrico.

La actitud ante el déficit ha sido una señal clara para todos los agentes económicos; ellos saben que el crecimiento del déficit trae el de los medios de pago y, si éste no ha de desbordarse, el aumento de las tasas de interés. Además, el desembolso de los créditos externos previstos para financiar el déficit depende de que el país esté al día en el servicio de la deuda; dada la indisciplina que campea en las empresas de servicios públicos, y dado el hecho nuevo de que los responsables de pagar la deuda que garantizó la Nación no son ya agentes del presidente, lo más probable es que para poner al día la deuda habrá que renunciar a algunos instrumentos de control monetario. El vaticinio de una alta tasa de inflación no se funda, pues, exclusivamente, en la perspectiva alimentaria, sino en el análisis del programa macroeconómico en donde el déficit vuelve a galopar . . . La esperanza de que no termine en hiperinflación está puesta en el equipo económico, porque la inflación, en el caso colombiano, no es por causa de él sino a pesar de él.

Es cierto, pues, que a veces hay fenómenos naturales o externos, una bonanza, una sequía, un invierno, que ocasionan presiones inflacionarias, ajenas a las decisiones políticas. Pero todos esos fenómenos pueden controlarse si existen la voluntad y la capacidad política de hacerlo. En octubre de 1985, pocos días después de que el presidente Betancur me lla-

mara al Ministerio de Hacienda, sobrevino una escasez mundial de café y un alza sustancial e imprevista en sus precios. Las proyecciones monetarias, cambiarias y fiscales que habíamos hecho hasta la víspera en el Banco de la República y con el equipo económico que presidía el ministro Junguito, quedaron obsoletas. Tuvimos entonces que elaborar un nuevo programa financiero para finales de 1985 y para 1986, e ingeniarnos otros instrumentos de política económica.

El Consejo de Estado y el Congreso nos negaron facultades de emergencia o extraordinarias para manejar la bonanza. Y hubo toda clase de ideas brillantes acerca de cómo gastar los nuevos recursos de que dispondría el Gobierno. Políticos y periodistas exigían que la mayor parte de la bonanza se gastara enseguida. Pero estábamos decididos a reducir la inflación. Ello fue costoso: por no haber dispuesto de facultades de emergencia tuvimos que gastar millones y millones de pesos en operaciones de contracción monetaria. Para calcular la magnitud del esfuerzo, basta pensar que en 1986 los registros de exportación de café ascendieron a US\$ 3.000 millones, con un aumento del 66% respecto al año anterior, mientras que en los años de 1976 y 1977 el aumento de los registros respecto a los años anteriores había sido del 46% y del 52% respectivamente. Y aunque no tuve que exhibir revólver en el Comité Nacional de Cafeteros, como es fama que hizo alguno de mis ilustres predecesores en el ministerio, sí tuve que retirarme alguna vez de una reunión: creo que lo del "portazo" es fábula. Pero en los doce meses finales del gobierno Betancur, la inflación para el nivel de obreros fue del 13.1%. Y en cada uno de los tres últimos meses de ese gobierno la inflación para el mismo nivel fue de cero, o inferior a cero. Al mismo tiempo el Producto Interno Bruto estaba creciendo tan rápidamente que alcanzó una tasa del orden del 5% en 1986. Y ya el desempleo comenzaba a disminuir. Cuando se quiere, se puede.